

## **La Administración de Justicia en el entorno competitivo**

Panamá al igual que el resto de las naciones de Latino América, ha pasado por importantes procesos de democratización y de reformas económicas en los cuales el derecho y la administración de justicia son factores de suma importancia por ser su función esencial la de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos y arbitrar los conflictos que puedan surgir, tanto entre estos como entre ellos y el Estado. Se entiende por administración o sistema de justicia al conjunto de normas, instituciones y procesos, formales e informales, que se utilizan para resolver los conflictos individuales y sociales que surgen como consecuencia de la vida en colectividad, así como las personas que forman parte de dichas instituciones o participan en tales procesos.

La administración eficiente de la justicia representa una base de apoyo para la mejora de la gobernabilidad la cual es la capacidad de un gobierno en un sistema democrático de mantener la paz, el orden, la seguridad, la libertad, los derechos humanos y la participación ciudadana en la orientación de las acciones públicas. También involucra la capacidad de negociar y dirimir las diferencias que surjan entre personas, grupos, sectores y regiones en sus demandas y objetivos. Es difícil lograr competitividad, crecimiento y desarrollo humano si hay inestabilidad política y judicial pues esto deriva incertidumbre en la orientación nacional, cambios abruptos y frecuentes en políticas públicas o en las normas y reglas institucionales.

Con la finalidad de contribuir con este esfuerzo de democratización, modernización y fortalecimiento de los sistemas de justicia del área latinoamericana, se han estado desarrollando desde hace algunos años, diversos programas auspiciados y financiados por gobiernos y agencias internacionales, a fin de mejorar la disposición y eficiencia de la administración de justicia. Ahora bien, si se tiene en cuenta la importancia de esta administración en el proceso antes mencionado de democratización y modernización es importante la participación de todas las instancias del estado por lo cual la intermediación de una sociedad civil como filtro de rendición social de cuentas al Gobierno es una variable determinante dentro del marco de la administración de recursos, ejecución de políticas públicas y vigencia de los derechos humanos.

Un factor crítico para la competitividad de un país es el adecuado desempeño de su sistema judicial. Más allá de su evidente importancia como pilar fundamental de un Estado de

Derecho, para la resolución pacífica de los conflictos que surjan en una sociedad, el desempeño del sistema judicial afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades económicas. En efecto, en una economía de mercado, la actividad económica se desenvuelve a través de transacciones que implican costos para las partes. Entre más claros y mejor protegidos estén los derechos de los agentes económicos involucrados, menores serán los costos de transacción. En una sociedad moderna, la función de adjudicar y proteger los derechos corresponde principalmente al sistema judicial. Un sistema judicial deficiente genera altos costos de transacción que traen como resultado: mercados que no pueden expandirse, agentes económicos con pocas posibilidades de alcanzar acuerdos contractuales más complejos, y mayores costos para la organización de las actividades económicas.

En palabras sencillas su función responde a los nuevos repertorios de acción popular que debe aceptar la maquinaria del Estado, para comprometer sus procedimientos en los asuntos colectivos y ciudadanos. Parte de esto se garantiza con un sistema judicial fuerte que haga efectivos estos mismos derechos. Por lo cual un mal desempeño de la justicia se traduce en un ambiente de incertidumbre, lo que represa significativamente el desarrollo de actividades económicas y restringe el tamaño de los mercados, la intensidad de la competencia y el ritmo de innovación. Entonces, un sistema judicial deficiente genera una asignación ineficiente de recursos, causando un impacto negativo en la productividad de la sociedad.

Algunos resultados determinantes de investigación acerca de la importancia de la administración de justicia eficiente han destacado que: A medida que los expertos en la relación entre la justicia y la economía exploran el papel que desarrollan las instituciones en el desarrollo económico muestran que temas como el apoyo institucional para el crecimiento económico, la protección de los derechos de propiedad, la reducción de los costos de transacción y la naturaleza y eficacia de las instituciones de un país desempeñan un papel decisivo en su proceso de desarrollo porque conforman el entorno dentro del cual se desempeña su economía. (SHERWOOD 1996).

De esta manera, los países más competitivos serán las naciones que posean mejores instituciones y entre mejor sea el papel de la justicia en cuanto a eficiencia y confiabilidad mayor será el aporte que éstas hagan al desempeño económico (LYNCH, 1998). Es por ello que el aparato de justicia cumple un importante papel en cuanto telón de fondo para la forma en que los particulares y las organizaciones se comportan fuera del



sistema formal e igualmente influye en la evolución de la sociedad y sus normas, a la vez que sufre sus efectos (Banco Mundial, 2001).

Finalmente algunos estudios del Banco Mundial han calculado que la eficiencia del sistema judicial incide en promedio en un 15% en el crecimiento económico de un país (como porcentaje de crecimiento del PIB en un año), aunque en países como Brasil y Argentina se ha calculado hasta en un 23% y en un 35% respectivamente (Sherwood, 2003).

### ¿Cómo está Panamá?

El Foro Económico Mundial en su medición global de competitividad 2010-2011 destaca en el análisis del pilar de instituciones que Panamá muestra rezago en algunos aspectos como la burocracia, la corrupción y en el tema judicial. Tal es así que solamente 3 de 21 indicadores analizados representan una ventaja competitiva (Derechos de Propiedad, Cumplimiento de Regulaciones y Protección a Accionistas Minoritarios) entre 139 naciones estudiadas, del resto de los indicadores todos considerados en desventajas competitivas, existen algunos ubicados en las peores posiciones mundiales sumamente bajas como los presentados en el cuadro N° 1.

**Cuadro N°1**  
**Principales Indicadores de Desventajas Competitiva**  
**Institucional. Panamá 2010**

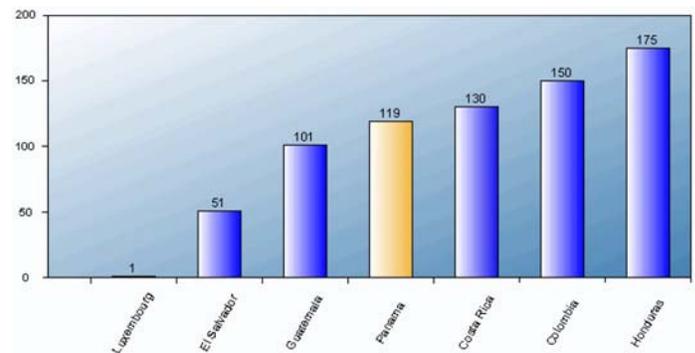
Indicadores	Ranking 2010
Independencia Judicial	125
Favoritismo en las Decisiones de Funcionarios de Gobierno	103
Eficiencia del Marco Jurídico en la Solución de Conflictos	91
Eficiencia del marco jurídico para impugnar los reglamento	86
Costos Económicos del Crimen y la Violencia	112
Crimen Organizado	103
Fiabilidad de los Servicios de la Policía	82
Fortaleza en protección de inversionistas*	93
Pagos irregulares y sobornos	78

Fuente: Informe de Competitividad Global 2010. Foro Económico Mundial

Como se puede observar entre los indicadores desventajosos competitivamente para Panamá se encuentra nuestra independencia judicial como principal debilidad del sistema institucional, razón por la cual, se ha considerado también junto a la corrupción y la burocracia como uno de los factores más problemáticos para hacer negocios en Panamá. A pesar de que el país ha dado signos de avance, estos vienen a representar los desafíos más importantes a superar.

Por otro lado el informe Doing Business del Banco Mundial 2011 demuestra que las dificultades para hacer cumplir contratos es una de las mayores brechas de competitividad que tiene Panamá. Luego del renglón de pago de impuestos (posición 175) el cumplimiento de contratos (posición 119) es la variable que más afecta negativamente el ranking del país (ver gráfico N°1), 47 posiciones por encima de la ubicación general del país en dicho ranking que es de 72. Este indicador se analiza bajo la perspectiva de que los tribunales que funcionen bien ayudarán a las empresas a ampliar sus redes y mercados. Cuando la ejecución del contrato es eficiente, las empresas tienen mayor acceso al crédito y tienen más probabilidades de comprometerse con nuevos prestatarios o clientes.

**Gráfico N° 1**  
**Facilidad de hacer cumplir un contrato, 2011.**



Fuente: Banco Mundial (Doing Business 2011).

La efectividad para hacer cumplir los contratos es un elemento crítico para el correcto funcionamiento de una economía de mercado y como tal, un elemento determinante para los agentes económicos sobre la calidad del ambiente para hacer negocios y atraer la inversión.

### ¿Qué se hace y qué se espera?

El trabajo para mejorar estos aspectos se está haciendo. Por medio del Órgano Judicial se ha reconocido que la necesidad de justicia de la sociedad ha impulsado a la institución a revisar viejos conceptos que la rigen, para reforzar las debilidades existentes por la escasez de recurso humano capacitado, la falta de elementales materiales de trabajo y las exigencias que surgen de la litigiosidad en constante crecimiento.

Considerando que estos aspectos inciden en la lentitud de los procesos lo que representa una mala defensa para los derechos fundamentales de los ciudadanos, los esfuerzos se han enfocado desde hace mas de una década en el fortalecimiento del Estado de Derecho, la disminución de la mora judicial y la



priorización de la Modernización de la Administración de Justicia como ejes de trabajo fundamentales para proveer a Panamá de las herramientas necesarias de avanzada hacia eficiente y eficaz administración de la justicia nacional.

Como se mencionó anteriormente se ha considerado como parte de la política nacional enfrentar estas problemáticas por medios de políticas de innovación y el prudente manejo fiscal ya que superándose los mismos se podrá promover un crecimiento económico sostenido, una mayor atracción de inversiones y un desarrollo económico y social equilibrado.

Se debe considerar la importancia que tiene para el país el manejo eficiente de las políticas públicas ya que siendo Panamá un país calificado ahora con grado de inversión estos factores problemáticos antes mencionados vienen a representar una ventana abierta para la fuga de las oportunidades de crecimiento y desarrollo. El trabajo lo tenemos que realizar todos como ciudadanos, empresa y gobierno a fin de promover un estado justo, abierto al dialogo con sus actores para realizar los ajustes necesarios a fin de promover un mejor desarrollo de la nación en general, determinándose de esta manera los cambios necesarios a la política judicial, laboral, educacional, de finanzas públicas e innovación tecnológica.

